**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES
SALA CIVIL-FAMILIA**

Magistrada Ponente
ÁNGELA MARÍA PUERTA CÁRDENAS

Sentencia No. 113

Proyecto aprobado mediante acta No. 129 de la fecha.
Manizales, Caldas, veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Estudiada la sustentación del recurso de alzada, acorde el traslado que en cumplimiento del artículo 14 del Decreto 806 del 2020 fue corrido mediante auto del 28 de junio de 2021, se **RESUELVE** la apelación interpuesta por el actor popular contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2021 por el Juzgado Civil del Circuito de Salamina, Caldas, dentro de la acción popular promovida por el señor Sebastián Colorado contra la Notaría Única de esa localidad.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda¹. Pretende el actor popular, la protección de los derechos colectivos establecidos en los literales d, l y m del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y la Ley 982 de 2005 en su artículo 8º; en consecuencia se ordene a la accionada contratar los servicios permanentes y de planta de un profesional intérprete y guía intérprete, o se contraten los mismos con alguna entidad idónea certificada y autorizada por el Ministerio de Educación. Solicita además, se le conceda el incentivo económico de ley, se condene en costas a su favor y se hagan las publicaciones pertinentes.

Aduce en sustento, que la Notaría accionada es un ente particular que presta el servicio público esencial de notariado, sin que cuente en el momento con los servicios peticionados; tampoco existen en sus instalaciones señales visuales, sonoras, auditivas ni alarmas, aunque puntualmente no peticionó nada sobre ello.

2.2. La Réplica. Por auto del 13 de enero de 2021² se admitió la demanda y se hicieron los ordenamientos de rigor. Notificada en debida forma, el señor Notario de Salamina brindó contestación³, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y pronunciándose sobre cada uno de los hechos, advirtiendo no existir en el libelo un discurso detallado que explique la presunta vulneración. Aceptó como cierto no contar con un profesional de planta de la idoneidad señalada, aclarando que no tiene obligación legal de hacerlo; cuenta sí con señales visuales, auditivas y sonoras aunque tampoco es su deber tenerlas.

¹ Archivo 002 del expediente, C. 01 Primera instancia.

² Archivo 008 del expediente, C. 01 Primera instancia.

³ Archivo 024 del expediente, C. 01 Primera instancia.

Fincó su defensa en las siguientes excepciones: Falta de jurisdicción; Falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de reglamentación para exigir el cumplimiento del deber estatuido en el artículo 8 de la Ley 982 de 2005; Existencia de una noma expresa en el Estatuto Notarial para la atención a personas sordas; Existencia de medios paralelos y/o alternativos para facilitar el acceso a servicios públicos como el notarial para la población sordo-ciega y/o sorda, y; supresión de los incentivos a los actores populares.

Conforme lo previsto en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, fue citado el Municipio de Salamina, el que se pronunció, a través de apoderada judicial, exponiendo no constarle ninguno de los hechos del libelo y oponiéndose a todas las pretensiones, por no provenir de ese ente la supuesta conculcación cuya protección se solicita, lo que impide que se estructure la causalidad física y jurídica necesaria para declarar responsabilidad. Formuló como excepciones las de: Falta de legitimación por pasiva; ausencia de responsabilidad; Inexistencia de violación de los derechos colectivos por parte del municipio de Salamina; Fuero de atracción (pues tendría que ser la Jurisdicción Contencioso Administrativa la que conociera del caso), y; Genérica.⁴

Por el Juzgado se adelantó el 15 de abril de 2021 la audiencia de Pacto de Cumplimiento a la que asistieron la parte accionada y la representante del Municipio, declarándose fallida por no haber comparecido el actor popular.⁵

2.3. La sentencia⁶ A través de decisión fechada 9 de junio hogaño, el judicial de primera instancia denegó el amparo rogado, desvinculó de la acción al municipio de Salamina, e hizo los demás ordenamientos de rigor.

Para llegar a tal determinación, el *a-quo* revisó lo concerniente a la competencia, concluyendo que la tenía por no ser los notarios autoridades administrativas en sentido subjetivo u orgánico, sino particulares regidas por el derecho privado. Frente a los pedimentos del actor, adujo no existir prueba con relación a la presunta trasgresión o amenaza de derechos colectivos, sino que por el contrario se había acreditado por la convocada que en sus instalaciones cuenta con las herramientas necesarias para atender las necesidades de los usuarios con discapacidades visuales y auditivas en forma adecuada, eficiente y ajustada a la normativa reguladora de la materia. Además de los medios suasorios allegados por la accionada, se apoyó en la inspección judicial realizada a las instalaciones de la Notaría, en la que se corroboró que existe un contrato con una empresa que presta efectivamente los servicios cuestionados; igualmente en el informe de visita técnica realizada por el Secretario de Planeación de Salamina, quien constató que esa dependencia cuenta con elementos diseñados para ayudar a la población sorda y/o sordo-ciega.

2.4. La apelación. Inconforme con la decisión, el accionante la recurrió. Al plantear los reparos⁷, reiteró no cumplirse en la Notaría con las exigencias

⁴ Archivo 025 del expediente, C. 01 Primera instancia.

⁵ Obra en el expediente la grabación de la audiencia virtual y el acta respectiva, archivos 38 y 39 respectivamente, C. 01 Primera instancia.

⁶ Archivo 066 del expediente, C. 01 Primera instancia.

⁷ Archivo 069 del expediente, C. 01 Primera instancia.

previstas en la Ley 982 de 2005; tampoco se probó que la empresa contratada por la convocada para prestar el servicio de intérprete -ASORISA-, estuviera autorizada por Ministerio de Educación para ello, amén que no lo hace de manera presencial sino virtual. Al momento de sustentar la alzada⁸, adujo anexar sendas sentencias de este Tribunal, con las que pretendía dar claridad a la diferencia entre intérprete y guía intérprete, a efecto que, como en ellas se decidió, se acojan sus pretensiones; no obstante las efectivamente anexadas, no se corresponden con las anunciadas⁹.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problema jurídico

De cara a los reparos esbozados por el recurrente, incumbe a la Sala determinar si del material probatorio allegado al trámite puede predicarse que las acciones adoptadas por la Notaría de Salamina respecto a la implementación de intérpretes y guías intérpretes devienen suficientes para garantizar la atención de la población con limitaciones visuales y auditivas, o si el desconocimiento a los intereses colectivos subsiste como lo predica el actor constitucional.

3.2. Tesis de la Sala

Delanteramente anuncia este Cuerpo Plural de Decisión que la providencia de primer nivel será confirmada, ya que de las pruebas obrantes se evidencia que no se está transgrediendo o amenazando por parte de la Notaría accionada los derechos colectivos invocados, dado que tiene contratado el servicio de intérprete y guía intérprete, del que pueden hacer uso las personas sordas o sordo-ciegas que allí deban ser atendidas; igualmente tienen implementadas señales luminosas, sonoras y avisos visuales, para garantizar el acceso en igualdad de condiciones de dicha población.

3.3. Supuestos jurídicos

3.3.1. De conformidad con el artículo 88 de la Carta Política desarrollado por la Ley 472 de 1998, la finalidad de la acción popular no es otra que la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que defina la ley, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o un daño contingente por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente definidos por la legislación.

3.3.2. Por mandato de los artículos 13 y 47 de la Constitución Política, en principio le corresponde al Estado adelantar políticas de prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, pero también existe el deber social de *“asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales, sociales, culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación y de cualquier otro tipo”* - Art. 6 núm. 4 Ley 1618 de 2013- el que también es exigido al particular, según la normativa establecida para la integración social de esa población - Ley 361 de 1997- y propender por el efectivo desarrollo de sus prerrogativas - Ley 1618 de 2013- .

⁸ Archivo 04 del expediente, C. 02 Segunda instancia.

⁹ Archivos 05, 06 y 07 del expediente, C. 02 Segunda instancia.

Con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos con personas en situación de discapacidad específicamente de aquellas sordas, sordo ciegas e hipo acusicas, inicialmente fue promulgada la Ley 982 de 2005, en la que se incorporaron varias medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de dicho sector poblacional para lograr que su inserción a la comunidad se hiciera de manera autónoma.

Entre las referidas determinaciones, se encuentra la atinente a imponer a las empresas prestadoras de servicios públicos, instituciones prestadoras de salud, bibliotecas públicas, centros de documentación e información y en general instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios al público, la incorporación *“paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas que lo requieran de manera directa o mediante convenios con organismos que ofrezcan tal servicio.”*

Por su parte, el artículo 15 de la citada disposición normativa impone a cargo de los establecimientos o dependencias estatales y de los entes territoriales con acceso al público la obligación de *“(…) contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoacústicas.”*

3.3.3. Ahora bien, la Ley 1346 de 2009 que aprobó la *“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”*, dispuso que una de las obligaciones del Estado era la de *“Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso al público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad”* y la Ley Estatutaria 1618 de 2013, estableció que *“ las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos”*; esto en palabras de la Corte Suprema de Justicia, impuso a esa clase de entes dichas obligaciones para *“ garantizar el acceso de esas personas, en igualdad de condiciones a, entorno físico, a las comunicaciones, a los servicios públicos, a través de los ajustes razonables necesarios”*. (Sentencia T- 850 de 2014 reiterada en STC5309 de 2015)

De tal suerte que, la normativa que regula la inclusión social de personas con discapacidad, en especial aquellas con restricciones auditivas y visuales, no prevé un modo específico y único para lograr dicho fin. Es decir, que no existe un determinado sistema o exigencia para que un ciudadano en condiciones como las anotadas en la demanda pueda acceder a servicios públicos o abiertos al público, como quiera que las señaladas en la Ley 982 de 2005 no son restrictivas pudiendo implementarse entonces las que garanticen el pluralizado propósito atendiendo al principio de razonabilidad y proporcionalidad de las cargas frente a la respectiva entidad.

3.4. Supuestos fácticos

3.4.1 Como objeto de divergencia con la decisión de primer grado, insistió el actor popular en que no se cumplía en la Notaría accionada con las exigencias hechas por la Ley 982 de 2005 en favor de la población sorda y/o sordo-ciega, y que el hecho de haber contratado el servicio de intérprete con la empresa ASORISA no las suple, por cuanto no se acreditó que ésta estuviera autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para tal efecto, además de prestarse de manera virtual y no presencial como se espera.

Dicho de otra forma, el reproche se circunscribe a la falta de observancia de los requisitos con que en su concepto debe contar el servicio de intérprete o guía intérprete dentro del ente, puesto que considera como insuficiente para garantizar los derechos colectivos de la población en las condiciones previstas por la norma, las medidas que ha implementado la Notaría Única de Salamina.

3.4.2. Obran como elementos de convicción los siguientes:

- Oficio SNR2020EE070872, mediante el cual la Superintendencia de Notariado y Registro informa al Juzgado el nombre de quien regenta la Notaría Única de Salamina, la dirección física donde está ubicada y la dirección electrónica en la que recibe notificación.¹⁰

-Certificación expedida por la emisora radial “Armonía Stereo 90.1” de Salamina-Caldas, acerca de la publicación a la comunidad sobre la existencia de la acción popular.¹¹

-Acta de visita técnica efectuada por el Secretario de Planeación Municipal de Salamina en compañía del Personero Municipal, el 2 de febrero de 2021 a las instalaciones de la Notaría Única de esa localidad¹².

-Inspección Judicial realizada a las instalaciones donde funciona la Notaría de Salamina, con el propósito de verificar los hechos del libelo¹³.

-Documentos que se ordenaron anexar al expediente en la diligencia de inspección judicial¹⁴: (i) Propuesta de prestación de servicios profesionales en interpretación, presentado por la Asociación de Sordos de Risaralda (ASORISA) al señor Notario de Salamina; (ii) Convenio celebrado entre ASORISA y el Notario de Salamina, para la prestación del servicio de intérprete a la población sorda y/o sordo-ciega, y; (iii) Certificado de existencia y representación de ASORISA.

3.4.3. Con el propósito de despachar el reparo, se aviene conveniente hacer referencia a lo que fue posible establecer con las pruebas que se aportaron dentro del plenario. Así se tiene que, según se constató en la inspección judicial realizada por el Despacho cognoscente, la Notaría cuenta con el servicio extrañado por el actor, prestado a través de la Asociación de Sordos de Risaralda, ASORISA, con quien lo contrató.

De ello dejó constancia el señor Juez en el audio en que se consignó lo acaecido en la diligencia, refiriendo que verificó los documentos soportes de tal afirmación, como lo eran la propuesta presentada por dicha entidad al Notario, el convenio subsiguiente realizado entre las partes cuyo objeto la prestación del servicio de intérprete y el certificado de existencia y representación de la contratista; también dio cuenta de la comunicación establecida desde esa oficina con la representante de ASORISA, de la información detallada obtenida acerca de su idoneidad profesional, los servicios que presta y la seriedad y reconocimiento que tiene en el Eje Cafetero y la forma como a ello se procede cuando en las instalaciones de la convocada se presenta un usuario para cuya atención se precise de un intérprete, sea de manera presencial o virtual.

En el documento que instrumentó el convenio celebrado entre ASORISA y el Notario de Salamina, está expresamente consignado que la primera “se compromete a ofrecer la disponibilidad del servicio de interpretación altamente

¹⁰ Archivo OO7 del expediente, C. 01 Primera instancia.

¹¹ Archivo 023 del expediente, C. 01 Primera instancia.

¹² Archivo 026 del expediente, C. 01 Primera instancia.

¹³ Obra en el expediente el audio de la diligencia presencial y el acta respectiva, archivos 052 y 053, respectivamente, C. 01 Primera instancia.

¹⁴ Archivo 055 del expediente, C. 01 Primera instancia.

*calificado de oyente o sordo que cuentan con el total respaldo de la comunidad sorda, cada vez que el señor Notario lo solicite, con una anticipación mínima de un día*¹⁵. La cláusula Cuarta señala el objeto del convenio: “ASORISA se compromete a garantizar el servicio de interpretación al usuario sordo y sordociego que así lo requiera, además por asegurar el servicio lo realizará los días y en las horas de atención al público del despacho del Notario... en las instalaciones de la misma, previa solicitud de dicho servicio. Y lo hará público en sus oficinas a través de carteles otro medio impreso o electrónico en donde se especifique que el usuario debe solicitar el servicio con antelación (sic)”. En cuanto a la vigencia se dijo: “El presente convenio tiene duración de un año a partir de la fecha de su suscripción” previéndose su prórroga automática en caso de no manifestar alguno de los contratantes expresamente y por escrito su deseo de terminarlo, con una antelación de un mes respecto de la fecha de vencimiento o de alguna de las prórrogas.

Cabe resaltar, que la contratista es una entidad sin ánimo de lucro, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira desde el año 1997, tal como se desprende del certificado de existencia y representación expedido el 27 de abril de esta calenda, también anexado.

Adicionalmente, en el acta de visita técnica realizada en las instalaciones de la encartada por parte del Secretario de Planeación Municipal de la Alcaldía de Salamina - Caldas, en compañía del señor Personero Municipal, se plasmó que “Durante la visita se puede evidenciar que las instalaciones de la Notaría Municipal ubicada en la calle 5 No. 5-39 del municipio de Salamina, Caldas se cuenta con elementos diseñados para ayudar a las personas sordas y sordociegas para la realización de los respectivos trámites notariales propios de dicha institución.”, lo que da cuenta de la atención preferencial de estas personas de especial protección constitucional.

Concuera la Colegiatura con la tesis de primer grado en el sentido que con la adopción de las herramientas ya descritas, las personas en situación de discapacidad por los factores señalados pueden acceder a la institución de manera autónoma y sin limitaciones, pues aquellas se erigen en idóneas para ese propósito sin que sea dable afirmar que la única forma de garantizar los derechos colectivos cuya trasgresión se asevera, sea la contratación de planta de especialistas en lenguaje de señas, máxime cuando la normativa contemplada por la Ley 982 de 2005 no eleva a rango obligatorio tal carga.

No se pierda de vista que el articulado de la disposición normativa citada¹⁶ consagra que **podrán** desempeñarse como intérpretes oficiales en lenguaje de señas las personas que obtengan tal reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional, de lo cual no se sigue en modo alguno que quienes no cuentan con tal calidad lo tengan prohibido o que los únicos llamados a ofrecer el servicio dentro de las entidades que trata la citada ley sean quienes han sido admitidos como “Interpretes oficiales”. En otras palabras, las normas instituidas por nuestro legislador, tratando de equipararlas a las que existen a nivel internacional no se encuadran en esta única posibilidad (contratación de planta de intérpretes profesionales), pudiendo entonces acudir a los recursos con que

¹⁵ El término de un día es si se requiere el servicio de manera presencial, lo que se explica por la necesidad de desplazamiento de quien fungirá como intérprete o guía intérprete al municipio de Salamina, pues si es de manera virtual es en el mismo momento que se precise, como se corroboró en la inspección judicial.

¹⁶ **Artículo 5°** “Podrán desempeñarse como intérpretes oficiales de la Lengua de Señas Colombiana aquellas personas nacionales o extranjeras domiciliadas en Colombia que reciban dicho reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional previo el cumplimiento de requisitos académicos, de idoneidad y de solvencia lingüística, según la reglamentación existente. (...)”

cuenta la Notaría, siempre y cuando se garantice a esta población el acceso de una manera integral a los servicios por ella prestados.

Alega igualmente el recurrente que la contratación del servicio con ASORISA no suple las exigencias de ley por prestarse de manera virtual y no presencial como debe ser, argumento que no tiene eco por las siguientes razones: En primer lugar porque es claro el convenio celebrado entre tal entidad y la Notaría, en indicar que los intérpretes con que cuenta la contratista pueden desplazarse hasta las instalaciones de la Notaría, siendo el único requisito que se solicite con un día de antelación; de hecho al momento de pactarse los honorarios, se incluye que cuando sea bajo esta modalidad, el Notario correrá con los gastos de desplazamiento. En segundo lugar por cuanto, como lo expresó el señor Juez, él mismo corroboró *“que existe sistema de intérprete, en el sentido que cuando se requiere cualquier empleado realiza llamada vía web Live chat, esto a través de un convenio que La Notaría de Salamina celebró con ASORISA, y los funcionarios directamente se comunican con un intérprete en tiempo real, de manera visual y auditiva”*; lo que permite colegir no solo que el servicio se puede prestar de manera presencial, sino que, de hacerlo de manera virtual, se cumple con ese propósito.

A juicio de la Colegiatura la interpretación del demandante, se dirige a imponer obligaciones desproporcionadas a cargo de la accionada, olvidando que el propósito de las disposiciones normativas que propenden por la integración de las personas con cualquier discapacidad, es lograr su efectiva inclusión a través de los medios disponibles, sin que para el caso particular la única manera de garantizar el acceso al ya aludido grupo poblacional sea la contratación de planta de un intérprete o guía intérprete, pues el convenio realizado con ASORISA, es suficiente para alcanzar el referido fin.

En cuanto a la idoneidad de la institución contratada para la atención a personas con discapacidad auditiva, que en criterio del recurrente sólo se acredita mediante la homologación realizada por el Ministerio de Educación Nacional, examinada la Ley 982 de 2005 no se advierte tampoco la existencia de un requisito de tal envergadura, a lo que se adiciona que por regla general estas organizaciones no tienen ánimo de lucro, su objetivo es la socialización de los medios de inclusión de la población en situación de discapacidad, por cuya loable finalidad no debe exigírsele requerimientos adicionales como los que pretende el actor.

En el caso concreto vale la pena resaltar que no fue discutida en modo alguno por parte del señor Sebastián Colorado a través de los medios probatorios puestos a su disposición por el ordenamiento jurídico, la supuesta falta de competencia de la *“Asociación de Sordos de Risaralda ASORISA”* a efectos de asumir a través de su personal la tarea de intérprete o guía intérprete, por lo que no puede valerse de dicho argumento para invalidar la decisión de primera instancia.

Para despachar la totalidad de las inquietudes del opugnante, es dable aclarar que la sentencia estimatoria cuya copia se anexó con el escrito de apelación, proferida por esta Corporación con participación, como magistrada revisora, de la aquí ponente, al desatar la segunda instancia de otra acción popular por él instaurada en contra del municipio de Marmato, no hace que en esta oportunidad la Sala se aparte de su precedente horizontal, dado que la situación fáctica allí acreditada, dista por mucho de lo probado dentro de este asunto constitucional.

3.5. Conclusión

Por lo anteriormente expuesto la sentencia objeto de recurso habrá de ser confirmada en su totalidad habida cuenta que del material suasorio obrante en el

expediente no se evidencia la vulneración o amenaza a los derechos de la colectividad cuya protección se invoca y por el contrario, se advierte que la entidad accionada ha adoptado las medidas pertinentes para garantizar el servicio de intérprete para quienes padecen de sordera y guía intérprete para los sordo-ciegos.

3.6. Costas

No se condenará en costas en esta instancia por no encontrarse demostrado que obrara con temeridad o mala fe- art. 38 Ley 472 de 1998-.

IV. DECISIÓN

Por lo anterior la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley, **CONFIRMA** la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Salamina-Caldas el 9 de junio de 2021, dentro de la acción popular incoada por el señor Sebastián Colorado en contra de la Notaría Única de esa localidad, a la que fue vinculado el municipio de Salamina-Caldas.

Sin condena en costas en esta instancia de conformidad con lo expuesto.

Se ordena devolver oportunamente, el expediente al despacho de origen

NOTIFÍQUESE

Los Magistrados,

ÁNGELA MARÍA PUERTA CÁRDENAS

ÁLVARO JOSÉ TREJOS BUENO JOSÉ HOOVER CARDONA MONTOYA

Firmado Por:

**ANGELA MARIA PUERTA CARDENAS
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
DESPACHO 6 SALA CIVIL-FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR MANIZALES**

**JOSE HOOVER CARDONA MONTOYA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
DESPACHO 5 SALA CIVIL-FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR MANIZALES**

**ALVARO JOSE TREJOS BUENO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
DESPACHO 9 SALA CIVIL-FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR MANIZALES**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario

Rad. 176533112001202000074-01
Segunda Instancia

Código de verificación:

88b9cc16efddf1f44799eb7ba9386ea3cba2391213fc1cbbdaf7e903cb52e332

Documento generado en 27/07/2021 08:39:23 AM